

Parte I

Política y gobernabilidad



César Azabache Caracciolo
Eduardo Ballón E.
Gabriela Camacho G.
Milagros Campos R.
Paolo Sosa Villagarcia

La incertidumbre como horizonte

Eduardo Ballón E.

Sumilla

El Gobierno cumplió más de 15 meses en medio de una larga crisis que permanece sin atención, mientras la descomposición política y la parálisis económica se instalaron en el país. La debilidad de los actores políticos, Ejecutivo y oposición, es un lugar común hace meses. Atemorizados por el control de daños al que los obliga la corrupción, los gremios empresariales evaden pronunciarse sobre el enfrentamiento entre ambos bandos, reconociendo a regañadientes la necesidad de la reforma y reivindicando simultáneamente la autonomía del Congreso; pragmáticos, porque el modelo es el denominador común de los poderes en pugna, esperan mantener sus ventajas tributarias, mayor flexibilidad laboral y la aprobación definitiva de Tía María.

Sin embargo, en el vaivén de la aprobación presidencial, un factor estratégico son los crecientes sectores de población que quieren cambios en los temas que los afectan cotidianamente. Antes que en la reforma política, que les interesa poco, buscan resultados en su día a día; distantes de la clase política y de los límites de la democracia representativa, pero también de la sociedad civil instituida, buscan instrumentos para avanzar puntualmente. Pueden generar protestas y movimiento, que serán débiles mientras no exista la capacidad de recuperar la política y darle sentido. Así pues, el margen de acción en los espacios institucionales parece de baja intensidad; quiénes pugnan por cambios tienen que entender que solo serán posibles si ganan la calle y se encuentran con los intereses y las demandas que la mueven.

EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE MARTÍN VIZCARRA cumplió más de 15 meses, en un escenario en el que continúa una crisis de larga duración que permanece sin mayor atención, mientras la descomposición política nos amenaza cotidianamente y la parálisis económica ya se instaló. En lo que va del 2019, la gestión del mandatario perdió parte del capital político que acumuló con el referéndum de diciembre pasado. Los resultados de aquél, que recompensaron a un Ejecutivo que encontró en la lucha contra la corrupción el camino para golpear y debilitar al fujiaprismo, fortaleciéndose al abrir espacio para las reformas judicial y política, fueron paulatinamente dilapidados por la impericia de un mandatario claramente comprometido con el modelo vigente, que creyó ingenuamente que el respaldo recibido se explicaba por su enfrentamiento a la corrupción y por los alcances de su gestión, sin percibir que a la base de los mismos se encontraba el hartazgo de la gente con la política y los políticos, focalizado claramente en un Congreso prepotente y abusivo.

Para recuperar la iniciativa presionó por la propuesta de reforma política. El voto de confianza que obtuvo el gabinete del Solar evidencia que los principales actores de la escena oficial decidieron mantener la situación de incertidumbre del país sin cambios sustanciales: un Parlamento mayoritariamente comprometido con el «control de daños» al que lo obligan los

casos *Lava Jato* y «cuellos blancos», además de la protección de sus propios intereses, frente a un mandatario claro en su decisión de durar hasta el 2021 aprovechando el rechazo que generan los fujimoristas, el Congreso y los políticos, no obstante sus ostensibles limitaciones para gobernar.

En este contexto, y en medio de una virtual parálisis económica y la destrucción de empleos formales desde mediados del 2017, de acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo, asistimos a las diferencias entre variantes neoliberales en el Congreso y el Ejecutivo. Aquellas que se observan entre el agrupamiento conservador (expresado en el *Pronunciamiento a nuestros compatriotas*¹, que busca parar lo que llaman el populismo plebiscitario de Vizcarra, frenar investigaciones y procesos de lucha contra la corrupción, e imponer un pensamiento moralizante respaldando a los sectores religiosos más tradicionales) y, el otro, más liberal (que defiende la apertura del sistema político y del enfoque de género en la educación pública, la afirmación de las instituciones y la denuncia de la actividad mafiosa²); estos últimos, con figuras como el primer ministro o Julio Guzmán, no cambian los acuerdos estables alrededor del modelo entre ambos, los empresarios y los medios de comunicación. Asistimos también a la expresión creciente, pero siempre fragmentada y parcial, de malestares y protestas de distintos sectores que muestran el carácter particular y fuertemente territorial de los actores y sus demandas, pero también una interpelación creciente del modelo, desvinculada de la política de la escena oficial.

¹ «Pronunciamiento a nuestros compatriotas». *Expreso*, Lima, 23 de mayo del 2019.

² Sobre el particular ver: Monge, Carlos. «Del Vizcarra I al Vizcarra IV: crisis, coaliciones y proyectos». *revistaajozurdo.pe*, Lima, junio del 2019. En: bit.ly/2NXuSU6

Turbulencias políticas en la escena oficial: un presidente en varios capítulos

Desde el inicio del actual mandato presidencial, quedaba claro de que se trataría de una gestión estructuralmente condicionada por una larga permanencia neoliberal y por la desregulación a expensas del Estado, la política y la sociedad como eje de la dinámica nacional³. Más allá de los anuncios de cambio que hiciera el mandatario en su instalación –mayor cercanía con la gente y sus necesidades, apuesta por la educación y la salud como bases para el desarrollo, lucha contra la corrupción y presencia efectiva del Estado en el territorio–, siempre estuvo claro que la continuidad se anclaba en la economía.

A lo largo de estos meses hemos asistido a distintos momentos/ versiones de un mandatario que ha cuidado su decisión clara y primigenia de «durar» hasta el 2021, aprovechando en ese camino las debilidades de nuestras principales fuerzas políticas, interesadas primero en supervivir y reordenarse para enfrentar las elecciones de ese año con posibilidad de éxito, antes que en hacerse cargo de la agenda de un país con señales crecientes de agotamiento y descomposición. La evolución de la aprobación presidencial que aparece en el gráfico siguiente está ligada a esos momentos.

El primer Vizcarra, hasta junio del año pasado, aparecía como un gobernante débil –sin fuerza política propia, con conexiones limitadas en la estructura del Estado, sin relaciones directas con los empresarios y sin operadores políticos–, cuyas primeras decisiones y nombramientos parecían buscar «contentar» al fujimorismo y a distintos sectores políticos interesados en gobernar desde el Congreso. La caída de su aprobación inicial fue acelerada y parecía incontenible⁴. El escándalo de «los cuellos blancos» y los audios

³ Mariani, Santiago. «Continuidad neoliberal en el Perú». *otramirada.pe*, Lima, 5 de junio del 2018. Ver en: goo.gl/Deohyj

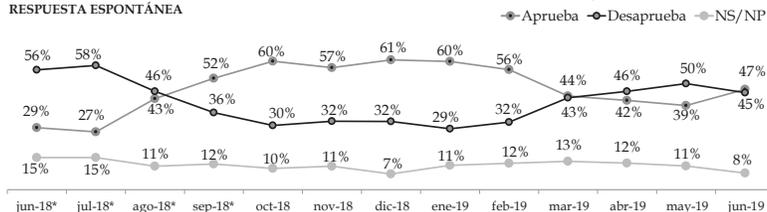
⁴ Sobre el particular ver: Ballón, Eduardo. «Atrapados en la telaraña». En: *desco*, Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, ed. *Perú Hoy. Sin paradero final*. Lima: *desco*, 2018.

que evidenciaban la corrupción del Poder Judicial y el Ministerio Público, que se sumaban al caso *Lava Jato* –que crecía en intensidad a medida que llegaba la información de Brasil–, aparecieron como una oportunidad para el Ejecutivo. El presidente entendió que podía empatar con la indignación ciudadana con la corrupción y, tras convocar a la comisión Wagner, anunció desde el Congreso la convocatoria a un referéndum para decidir sobre la reforma judicial y la reforma política, convocando así a la gente para resolver cambios que el sistema no lograba producir.

Gráfico n° 1 Aprobación del presidente Vizcarra, junio 2018-2019

¿Usted aprueba o desaprueba la forma como MARTÍN VIZCARRA está conduciendo su gobierno?

RESPUESTA ESPONTÁNEA



Junio 2019	Total	Zona geográfica						Nivel socioeconómico			Sexo		
		Lima	Interior urbano	Interior rural	Norte	Centro	Sur	Oriente	NSE A/B	NSE C	NSE D/I	Hombre	Mujer
Aprueba	47%	45%	47%	50%	39%	58%	48%	57%	62%	48%	42%	51%	43%
Desaprueba	45%	47%	47%	39%	49%	41%	49%	30%	34%	45%	49%	44%	46%
NS/NP	8%	8%	6%	11%	12%	1%	4%	13%	5%	7%	9%	5%	11%

*Datos 2018 GIK/Elaboración *La República*

Base junio 2019: Total de entrevistados-Nacional urbano rural (1218)

Fuente: Instituto de Estudios Peruanos (IEP). *Informe de opinión, junio 2019*. Lima: IEP, 2019.

Ver en: bit.ly/2xQju1j

Esos fueron los mejores momentos de la aprobación presidencial. Los resultados del referéndum del 9 de diciembre pasado consagraron una victoria indiscutible del presidente, por extensión de su gobierno, en la consulta ciudadana. Los votos válidos por el «Sí» a la conformación de la Junta Nacional de Justicia, a la regulación del financiamiento de partidos y a la prohibición de reelección inmediata de parlamentarios, estuvieron por encima del 85% en la gran mayoría de regiones, superando el 90% en siete

de ellas, mientras el «No» a la bicameralidad fue más contundente aún, estando por encima de ese porcentaje en 13 departamentos.

La otra cara del respaldo al mandatario fue el rechazo al Congreso de la República. Más exactamente a la mayoría fujiaprista, que ante la opinión pública arrastra a todos los parlamentarios, sin excepción, y es parte central de la desconfianza plena que rodea a los políticos y a la propia política. Así pues, voceros de los fujiapristas, aún perplejos por la detención preventiva de Keiko Fujimori y el patético naufragio del asilo de Alan García, concluido el referéndum, insistían en encontrar la «desconexión» entre el mandatario y la realidad en un intento inútil por negar su derrota.

El mismo 9 de diciembre concluyeron también las elecciones de gobernadores regionales, importantes, entre otras cosas, porque desde su instalación en Palacio de Gobierno, el Ejecutivo apostó por equilibrar la cancha con su relación con las autoridades descentralizadas. La legitimidad de origen de los recién elegidos resultó severamente herida en la mayoría de casos: el ausentismo electoral y la suma de votos blancos y nulos superaron los que se observaron el 2014, y nueve de los gobernadores elegidos tienen sentencia o se encuentran con procesos judiciales avanzados, mientras 17 con acusaciones e indagaciones. Ambos hechos, los resultados del referéndum y la elección de las nuevas autoridades subnacionales, evidenciaron, si hacía falta, el desplome del sistema de representación y el colapso de las franquicias que son los denominados partidos nacionales.

En paralelo, las disputas en el Parlamento continuaron luego de que a fines de diciembre el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien finalmente renunció a la bancada naranja, autorizara el registro de nuevas bancadas ordenado por un fallo del Tribunal Constitucional. Frente a ello, el fujimorismo, reducido a 53 miembros, amagó con su censura sin éxito, evidenciando una vez más su falta de estrategia y orden, agravada por la prisión de su lideresa. A inicios de enero se cerró el mejor momento

para el mandatario: el ex fiscal de la nación, Pedro Chávarry, fue finalmente forzado a renunciar tras haber intentado cambiar a los fiscales a cargo de las investigaciones sobre *Lava Jato*, pretensión rechazada por la gente en la calle, aprovechada por el presidente, como lo muestra el gráfico n° 1.

A partir de ese momento el Ejecutivo cayó en su laberinto y fue ganado por sus errores y debilidades. Ante el desafío de gobernar (gestionar la economía desde las necesidades y demandas de las personas y no desde las presiones de las empresas; responder a la multiplicación de la delincuencia y la inseguridad ciudadana; afrontar efectivamente las tareas de la reconstrucción; y responder a las urgencias cotidianas de empleo, ingresos y servicios de la gente) la gestión empezó a naufragar, lo que se evidenció en las encuestas.

Entre marzo y abril las debilidades del Gobierno se multiplicaron. Un premier y un gabinete remozado que no despertaron interés y obtuvieron un voto de confianza raspando, y gracias al fujimorismo; un nuevo conflicto en Las Bambas, desnudando la impericia gubernamental; acusaciones de corrupción y renuncia de nuevos ministros y algunos funcionarios; 17 muertos en el incendio de un bus en un paradero informal del que se «acusaban» distintas autoridades; el escándalo de los textos escolares y el enfoque de género; entre otros, evidenciaban la falta de gobierno como el argumento más fuerte para la desaprobación de la gestión. En este escenario, el mandatario, que encuentra en las encuestas su guía, anunció la presentación de 12 propuestas de reforma política, insistió en la aprobación de la norma antielusión y se quejó de la lentitud del Congreso con los proyectos de reforma judicial. Buscaba así equilibrar un tablero en el que el fujimorismo y sus aliados recuperaban crecientemente el control del Congreso, y en el que los empresarios, superado el espanto que les causó el «club de la construcción», presionaban por cambios en la mencionada norma, con el apoyo de la vicepresidenta.

Cuadro n° 1
Evaluación de la forma en que el presidente y su equipo de
gobierno vienen manejando los siguientes aspectos
(pregunta asistida)

% MAL + MUY MAL	TOTAL	ZONA GEOGRÁFICA				
		LIMA	NORTE	CENTRO	SUR	ORIENTE
Lucha contra la delincuencia	52%	57%	45%	47%	54%	55%
Los servicios de salud en postas y hospitales	47%	53%	40%	40%	55%	30%
El desarrollo del empleo	41%	42%	43%	44%	43%	33%
Los programas sociales para los pobres	39%	41%	37%	36%	46%	26%
El cuidado del medio ambiente en todo el país	38%	40%	35%	40%	42%	33%
Lucha contra la corrupción en el Estado	37%	40%	37%	20%	37%	44%
Lucha contra el narcotráfico	37%	40%	34%	25%	39%	38%
Lucha contra el terrorismo	36%	38%	33%	23%	39%	42%
La administración de justicia (cumplimiento de la ley y derechos humanos)	33%	37%	33%	32%	31%	27%
Manejo de los conflictos sociales	33%	35%	27%	31%	44%	24%
La economía	33%	35%	29%	35%	33%	32%
La educación en los colegios	32%	41%	23%	33%	34%	20%
La construcción de las obras públicas	32%	37%	28%	33%	38%	16%
La descentralización del país	30%	33%	23%	29%	35%	24%
Crecimiento de la inversión privada	27%	31%	25%	19%	28%	21%

Fuente: IEP. *Informe de Opinión Especial sobre Seguridad Ciudadana*. Lima: IEP, 2019⁵.

En un escenario nuevamente encrespado, el fujimorismo alentó la interpelación de la ministra de Educación en mayo, evidenciando su pretensión de largo plazo de controlar la información a los

⁵ Ver en: bit.ly/2Qh686W

escolares sobre la sexualidad, pero también sobre el conflicto armado interno. En alianza decidida con el fanatismo religioso, a partir de una campaña de desinformación y mentira, buscó y busca imponer su visión «provida y profamilia», anunciada por Luis Galarreta en su relanzamiento partidario, así como su narrativa sobre la violencia en el país. En este contexto, el fujiaprismo y sus aliados ocasionales, como los congresistas Juan Sheput y Víctor Andrés García Belaúnde, jugaban a consolidar el «poder» del Congreso, bloquear toda posibilidad de reforma política hasta el 2021 y postergar la reforma judicial. Golpear al Gobierno en su precariedad era el camino, como lo evidenció el patético espectáculo de la asistencia del ministro del Interior y un equipo policial a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas del Congreso.

El nuevo blindaje a Chávarry, impidiendo la acusación constitucional, tanto como el rechazo a la propuesta de reforma de la inmunidad parlamentaria del Ejecutivo, llevaron al mandatario a un nuevo mensaje, anunciando, con su gabinete y con los gobernadores regionales, su decisión de hacer cuestión de confianza sobre varias de las propuestas presentadas, poniendo plazo para su aprobación sin alterar su contenido fundamental hasta el término de la legislatura, so pena de disolverlo y convocar a nuevas elecciones parlamentarias. Como era previsible, el gabinete obtuvo el voto de confianza: 77 representantes, 33 fujimoristas entre ellos, decidieron mantener sin cambios sustanciales la situación política del país. Esto es, un Congreso mayoritariamente comprometido con algo tan elemental como la protección de sus intereses privados, es decir, el sueldo y la impunidad de sus actos, así como un Ejecutivo, más precisamente un mandatario, decidido a durar hasta el 2021, que encontró en las propuestas de reforma judicial y política los instrumentos que de alguna manera lo acercan a la gente, a pesar de su incapacidad para gobernar. Sancionada la confianza, que permite a la mayoría de actores de esta larga película sentirse

victoriosos (lo son porque en sentido estricto nada se mueve), el país formal respirará tranquilo unas semanas más, confiando en el apaciguamiento de los ánimos y en la distensión de la polarización.

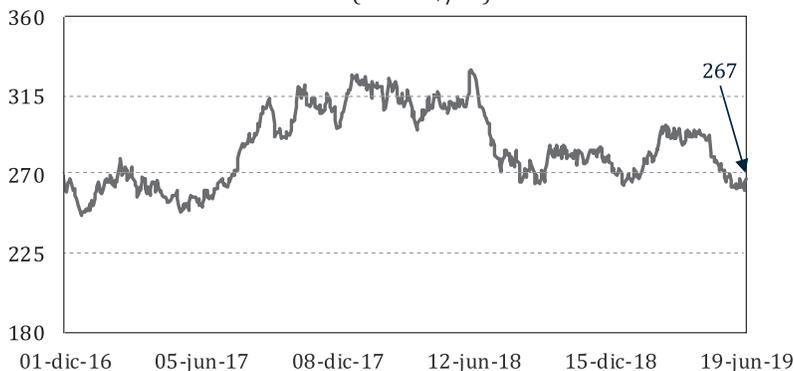
Una economía paralizada

Las turbulencias de la política están acompañadas por los problemas de nuestra economía, que tratan de ser explicados por los defensores del modelo como efecto del ruido institucional y de la pugna entre Ejecutivo y Legislativo. En realidad, los vientos de la economía mundial dejaron de favorecernos. Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, alentadas por la inestabilidad del «factor Trump», están amenazando crecientemente el comercio y el crecimiento económico mundial. La Organización Mundial del Comercio⁶, en abril de este año, anunciaba que el volumen del comercio descendería un 2.6% en relación al año anterior, mientras más recientemente el Banco Mundial⁷ encontraba que el comercio y la inversión internacional eran menores a lo esperado en enero, bajando su pronóstico de crecimiento mundial a 2.6%. Considerando que ambos países son nuestros principales socios comerciales, su enfrentamiento nos afecta. El precio del cobre, por ejemplo, ha registrado su nivel más bajo en los últimos años, tal como se ve en el siguiente gráfico.

⁶ Véase: bit.ly/2Ib5FAY

⁷ International Bank for Reconstruction and Development. *Global Economic Prospects. Heightened Tensions, Subdued Investment*. Washington D.C.: World Bank Group, 2019.

Gráfico n° 2
Cotización del cobre
 (ctv. US\$/lb.)



Variación %			
19 Jun.2019	12 Jun.2019	31 May.2019	31 Dic.2018
US\$ 2.67/lb.	1.1	2.0	-1.2

Fuente: bit.ly/2xOVJGY

La disminución de las exportaciones, de los flujos de capital y de la inversión extranjera directa son algunas de las consecuencias previsibles. Siendo importantes, los factores externos no son la causa principal de la desaceleración de nuestra economía, cuyo crecimiento, todo lo indica así, no llegará al 4.2% inicialmente previsto por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Los datos del Ministerio de Trabajo, que se contraponen a los del Banco Central de Reserva, indican que la economía urbana está estancada hace 47 meses y destruye empleos formales desde el segundo semestre del 2017, mientras que en lo que va del año el sector manufacturero disminuyó 4.4%.

Todo indica que la falta de una mejor política fiscal y una política monetaria expansiva son parte de la explicación. Por lo demás, los motores de crecimiento que esperaba el MEF, el crecimiento de la inversión pública y privada, no están funcionando

como se creía. Así, a junio, la inversión pública tuvo un crecimiento de 0%, tras haber caído 31% en mayo, lo que se explicaría por la denominada «curva de aprendizaje» de las nuevas autoridades regionales y locales que ya estaría recuperándose⁸. Sin embargo, si observamos la ejecución presupuestal del primer semestre por niveles de gobierno, observamos un avance total de apenas 24.6%, donde el nivel nacional llega apenas a 25%, con sectores estratégicos para la gente, como educación y salud, con una ejecución mediocre, 21.4% y 19%, respectivamente, no obstante las urgencias que los atraviesan. Por su parte, la inversión privada tampoco está creciendo mucho: si la miramos por importación de bienes de capital, entre enero y abril crecieron apenas 1.5%.

En este escenario, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) en los últimos días hizo pública su *Agenda País*. En ella, tras ofrecer sus «diagnósticos» sectoriales, propone un conjunto de medidas que consideran indispensables para «recuperar» la senda del crecimiento, es decir, para mantener el modelo. De esta manera, entre otras cosas, buscan recortar la consulta previa y reducir las facultades del Ministerio del Ambiente para incentivar la minería; defienden las exoneraciones tributarias y el régimen laboral en la agroexportación, buscando incentivos similares para la forestería; insisten en las Alianzas Público Privadas (APP) para la infraestructura; pretenden que el Estado les «pague» a las empresas para los trabajadores que pasen a contrato indefinido... el rosario es largo y la autocrítica nula. Ninguna mención al «club de la construcción», ninguna palabra sobre la corrupción y los problemas de las APP, mucho menos alguna preocupación por las necesidades de la gente y la

⁸ Para sostener este argumento, se señala que el 2011 la baja fue de 11% y el 2015 de 10%.

precariedad de nuestra democracia. Claridad si en sus prioridades y en su capacidad de presión⁹.

Sobre la conflictividad social¹⁰

Los conflictos sociales, que en el segundo semestre del 2018 llegaron a 202 (setiembre), descendieron hasta 179 en el mes de febrero del 2019, cuando lentamente empezaron a crecer, tal como se observa en el gráfico n° 3¹¹, evidenciando las debilidades y la impericia del Gobierno en la materia. En febrero, la paralización de los transportistas de carga pesada reclamando por el alza del combustible, la devolución del impuesto selectivo al consumo del diésel, la resistencia al uso del GPS y la reducción en los peajes, aceleró la renuncia del premier César Villanueva, según varios diarios, por diferencias con el MEF en la solución a la que se llegó. Desde entonces se dieron distintas movilizaciones y medidas de protesta de diversas organizaciones y sectores, demandando atención a sus necesidades y expectativas.

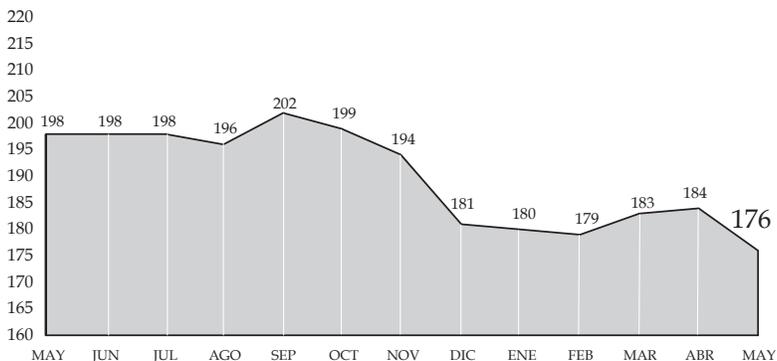
En marzo, Las Bambas empezó a atraer la atención: alcaldes y comunidades de Paruro denunciaban que la carretera Cusco - Paruro era afectada por vehículos de carga pesada de la empresa MMG, además de la contaminación ambiental que producían; el alcalde provincial y las organizaciones de Chumbivilcas exigían la modificación del estudio de impacto ambiental del proyecto Las Bambas por los efectos del transporte de mineral que cruza la provincia, además de demandar al Estado la creación de un

⁹ Ver: Prialé, Javier. «Confiep: Pedimos al presidente dos señales: que salga Tía María y que se extienda el régimen agrario». *Gestión*, Lima, 1 de julio del 2017. En: bit.ly/2Sd2mw6

¹⁰ Esta sección se basa en un artículo previo del autor. Ver: Ballón, Eduardo. «Conflictividad social y crisis política con actores débiles». *revistaojozurdo.pe*, Lima, junio del 2019. En: bit.ly/2NXuSU6

¹¹ Defensoría del Pueblo. *Reporte mensual de conflictos sociales N° 183*. Lima: Defensoría del Pueblo, 2019. Ver en: bit.ly/2XqNmR6

Gráfico n° 3
Conflictos sociales por mes, mayo 2018-2019



Fuente: Defensoría del Pueblo - Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales (Simco).

fondo social que atienda sus necesidades básicas y un *shock* de inversiones por tres años para la proyectos de la Mesa Técnica para el Desarrollo de Chumbivilcas (que tiene proyectos que no se ejecutan y expedientes técnicos sin financiamiento), además del pago a las comunidades campesinas por el corredor vial sur que cruza su propiedad.

En los primeros días de abril el conflicto se desató. Las protestas iniciadas por la comunidad de Fuerabamba fueron seguidas por paros y bloqueos en Abancay, Andahuaylas, Cotabambas, Santo Tomás, Quispicanchi y Paruro. A la base, además de los cambios en el proyecto original –un mineroducto, una carretera asfaltada por la empresa para trasladar suministros, nueve modificaciones al proyecto original y nuevas normas legales para que aquellas se realicen rápidamente y sin participación de la población¹²–, se encuentran las sobreexpectativas que se generaron, los

¹² Sobre el tema, ver: Leyva, Ana. «Las Bambas: desde las demandas de los actores sociales». *Signos*, n. ° 2. Lima: Centro de Estudios y Publicaciones (CEP), 2019, pp. 6-7. En: bit.ly/2LSbuoX

compromisos que se incumplieron sistemáticamente, así como una carretera que se construyó sin que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones consulte e incorpore a las comunidades propietarias, ignorando incluso sus propias directrices¹³. Hoy, aunque con grandes dificultades, la negociación entre Estado, empresa y comunidad está instalada.

Ese mismo mes se produjo el enfrentamiento entre la población de Trompeteros y la empresa Pluspetrol, con varias personas heridas, así como la toma del campamento petrolero del lote 8 por los pobladores nativos de la zona, exigiendo la declaratoria de la emergencia ambiental y mejores condiciones laborales. Simultáneamente, en San Gabán (Carabaya, Puno), una interdicción para la erradicación de cultivos de hoja de coca dejó dos muertos y varios heridos y detenidos, ocasionando el bloqueo de la vía interoceánica Juliaca - Madre de Dios, exigiendo la presencia del Ministerio Público. En ambos casos, Trompeteros y San Gabán, también hay mesas de diálogo en curso.

En mayo fue el paro agrario. Organizado y conducido por la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) y las Juntas de Usuarios de Riego (JUR), estas lograron movilizarse después de muchos años, exigiendo medidas para defender la producción nacional de la competencia desleal, impulsar la producción agropecuaria, medidas de protección a distintos productos, el equipamiento a la comisiones y juntas de usuarios con maquinaria y logística, el establecimiento de una mesa de diálogo entre el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Peru (Jnudrp) y Conveagro, entre otras demandas. Como resultado del mismo, el Gobierno creó una mesa de diálogo temporal y multisectorial para analizar e identificar alternativas frente a la problemática agraria. Finalmente, hay que mencionar el paro del macrosur del 6 de junio pasado, que

¹³ Ver: Vivas, Fernando. «José de Echave: 'Una comunidad no es una organización criminal'». *El Comercio*, Lima, 31 de marzo del 2019. En: bit.ly/2UcDRnd

exigía, entre otras cosas, el reinicio de las operaciones del proyecto del gasoducto, además del rechazo al recorte de derechos laborales público y privados, a la recentralización alentada por el MEF y al proceso de privatización de recursos estratégicos para favorecer a las mineras, respaldando a fiscales y jueces en la lucha contra la corrupción.

Sin duda, las movilizaciones de los últimos meses evidencian algunas cosas. De un lado, la naturaleza de los distintos malestares de la población que los llevan a la acción. En los casos reseñados se trata de movimientos que tienen alguna «historia» y temporalidad previas, cierta organización jerárquica, apuntan a formas distintas de representación social y tratan de cambiar algunas relaciones de poder instituidas, apropiándose conflictivamente de espacios públicos, por sus intereses. Así pues, aunque con contenidos puntuales y distintos, estos interpelan de diferente manera el modelo. Las movilizaciones del corredor minero, como las de Trompeteros, no siendo de resistencia sino de convivencia con las industrias extractivas, es decir, de demanda de condiciones y derechos, evidencian y cuestionan el carácter del modelo, donde a la enorme asimetría de poder entre la gente y las empresas, se suma la protección irrestricta del Estado a las primeras y sus exigencias insaciables. Recordemos simplemente que hay más de 130 convenios que les facilitan protección policial y que el Estado hace tabla rasa de sus propias normas, como lo evidencian ambos casos. El paro agrario, por su parte, resulta de la insoportable marginación de la pequeña agricultura y la agricultura familiar de las políticas públicas de sucesivos Gobiernos dedicados a apoyar la gran agroexportación.

Por otro lado, estos movimientos muestran también el carácter específico y fuertemente territorial de los actores y sus demandas. En ello se parecen mucho a protestas o activismos que no llegan a ser movimientos –carecen de temporalidad, son más fugaces, tienden a autoconvocarse, no pugnan por representación pero

tratan también de producir algunos cambios y alimentan vínculos y formas de agrupamiento¹⁴-, como las recientes movilizaciones limeñas contra los peajes, especialmente en Puente Piedra y Lurín. En unos, como en otros, participan quienes son directamente afectados y lo hacen alrededor de plataformas concretas y precisas. Cuando aquellas son más amplias y abiertas, como ocurrió con el paro agrario a pesar de su carácter sectorial, o la movilización del macrosur, los resultados –sin perder importancia– son más difusos. Así, en el primer caso, los alcances de la mesa instalada se limitan a la mejora de aspectos productivos, cuando lo central de la problemática del sector son las condiciones de vida y las pocas oportunidades que tienen los productores y sus familias¹⁵. Por su parte, la movilización del sur mostró la limitada posibilidad que existe en la macrorregión para generar un ambiente de enfrentamiento con el Gobierno, no obstante su desaprobación, cinco puntos por encima del promedio nacional.

En este contexto, desde el lado del Estado, a las dificultades del Ejecutivo para enfrentar la crisis política se añade su precariedad para responder a la conflictividad social, que es parte de sus dificultades para gobernar. Si bien muchos de los conflictos son «herencia» de gestiones anteriores, el compromiso del Ejecutivo con el modelo le impide mirar más allá de cada uno de ellos y sus circunstancias. Su persistencia en las mesas de diálogo, que por lo general no pueden resolver el problema que genera la protesta porque muchas de las demandas no son de solución inmediata o no descansan exclusivamente en decisiones del Ejecutivo, son parte de las ataduras que no logran resolver. Su falta de experiencia, que les impide prevenir movilizaciones largamente «anunciadas» –las Bambas, Trompeteros, San Gabán o los peajes–, se agrava por su

¹⁴ Vizer, E. A. *La trama (in)visible de la vida social: comunicación, sentido y realidad*. Buenos Aires: La Crujía, 2003.

¹⁵ Eguren, Fernando. «El Paro agrario y el diálogo con el gobierno». *otramirada.pe*, Lima, 23 de mayo del 2019. En: bit.ly/2wlpbU9

falta de norte: en lo que va de la gestión Vizcarra, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo ha tenido ya cinco responsables distintos, con los consiguientes cambios e inestabilidad en los procesos y negociaciones a su cargo.

Para terminar

La debilidad de los actores políticos en la crisis que vivimos, Ejecutivo y oposición, es un lugar común hace ya varios meses. Aterrorizados aún por el control de daños al que los obliga *Lava Jato*, los gremios empresariales evaden pronunciarse claramente sobre el enfrentamiento entre ambos bandos, reconocen a regañadientes la necesidad de las reformas (política y judicial) y reivindican simultáneamente la autonomía y la competencia del Congreso. Como siempre pragmáticos y claros en sus intereses, en el río revuelto de esa conflictividad demandan de ambos bandos lealtad con el modelo: mantener sus ventajas tributarias, más flexibilidad laboral y, ahora, la aprobación final de Tía María, mientras sectores de ellos, con Roque Benavides a la cabeza, acarician el saltar a la política el 2021.

En el descenso de la aprobación de Vizcarra, un factor estratégico son los crecientes sectores de la población que esperan resultados sobre los temas que los afectan cotidianamente. Significativamente ubicados en el interior del país y en los segmentos con menores recursos económicos, desconfiados y alejados de la clase política, de los límites de la democracia representativa y relativamente distantes de la sociedad civil instituida, antes que en la reforma política, que les interesa poco, buscan resultados en el día a día. Como vemos, pueden generar protestas y movimientos, pero estas acciones serán débiles mientras no exista la capacidad de recuperar la política y darles sentido a los partidos.

Así las cosas, el margen de acción en los espacios institucionales es reducido y parece de baja intensidad. Y si bien es cierto que se ha

frenado por un rato a los sectores más autoritarios y conservadores del Congreso, lo que no es menor, ello tampoco es definitivo. Los actores mayoritarios de la escena oficial tendrán que encontrar un nuevo libreto si quieren la atención de la gente, mientras quienes pugnan por los cambios tienen que entender que estos solo serán posibles si ganan la calle y se encuentran con los intereses y las demandas que la mueven.